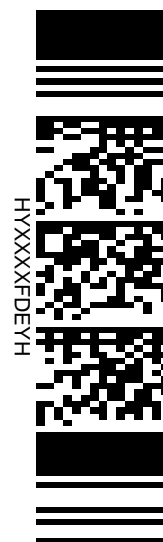


Santiago, trece de julio de dos mil veintidós.

**Visto:**

En autos RIT N° T-461-2020, RUC N°20-4-0256909-4, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, caratulados “VALDERRAMA/CMPC TISSUE S.A”, en procedimiento de tutela de derechos fundamentales, daño moral y cobro de prestaciones; en subsidio despido injustificado y cobro de prestaciones, por sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se rechazó acción de tutela; se acogió la demanda subsidiaria de despido injustificado declarando improcedente el despido del que fue objeto el actor y, por tanto, condenó a la empresa demandada al pago del recargo legal del 30%; a pagar los descuentos por control reembolsos cuenta corriente que realizó al finiquito del actor; acogió la excepción de prescripción respecto de los feriados entre los años 1995 y 2008; dispuso que las cantidades ordenadas pagar deberán serlo con los reajustes e intereses que se indican en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, y no condenó en costas a la demandada, por no haber sido totalmente vencida y haber tenido motivo plausible para litigar.

Contra ese fallo la parte demandante dedujo recurso de nulidad, fundada en 3 causales, que interpuso de manera subsidiaria: (i) la del artículo 478 letra d) del Código del Trabajo, cuando en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre intermediación o cualquier otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial expresamente; (ii) la del 478 letra e) en relación al artículo 459 N° 4, ambos del Código del Trabajo; (iii) la del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, por haber sido pronunciada con manifiesta infracción de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica;



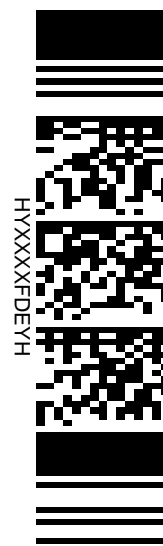
Respecto de la primera causal, solicita que se anule la sentencia de autos, y a su vez ordene se retrotraiga la causa a la etapa procesal de iniciarse nuevamente la audiencia de juicio, dirigida por juez no inhabilitado.

En cuanto a la segunda y tercera causales, pide se anule la sentencia y se proceda a dictar sentencia de reemplazo, declarando que se hace lugar a la acción de cobro de las diferencias de indemnización por años de servicios y aviso previo convencional pactada por las partes en contrato de trabajo de 1995, el que se mantiene vigente en lo relativo a la cláusula de indemnizaciones, ya que el contrato de trabajo de enero de 2018, fue impuesto por la demandada y no acordado libre y de común acuerdo por las partes, vulnerando el artículo 5 del código del trabajo, condenado a la demandada: a) Al pago de la indemnización por años de servicios sin tope de año ni montos; b) Al pago de la indemnización de sustitutiva del aviso previo sin tope.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los apoderados de ambas partes.

### **Considerando:**

**Primero:** Que, por la causal del artículo 478 letra d) del Código del Trabajo, alega que en el juicio fueron violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación, precisando que la prueba se produjo y fue percibida directamente por la sentenciadora en las audiencias de juicio del 28 de abril y 7 de mayo de 2021, casi 7 meses antes de la dictación del fallo de autos, dando ello cuenta de los extensos intervalos de tiempo desde la recepción y rendición de la misma y el extenso periodo de casi 7 meses que transcurrió para la dictación de la sentencia, lo que afecta la percepción inicial de la prueba y consecuentemente la misma ley que consagra el principio de inmediación, por lo que se vuelve imperante la necesidad



que se rinda de manera continuada y su fallo sea en los plazos establecidos por la ley, con el fin de resguardar esta percepción inicial y que no se diluya o relativice en el tiempo.

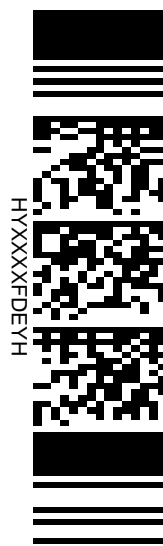
Afirma que el contacto directo del juez con cada uno de los medios de prueba no encontró resguardado, pues existió una completa fragmentación de la instancia destinada a aquello y el momento de dictación de la sentencia recurrida. Agrega que tampoco sabe si hubo un análisis conjunto de la rendición de todos los medios de prueba, ya que a casi 7 meses de la última audiencia de juicio, la magistrado dicta una resolución con fecha 22 de noviembre de 2021, en la que señala que se modifica el plazo de dictación de sentencia para el 22 de noviembre de 2021, a fin de dar cumplimiento al artículo 457 del Código del Trabajo, sin embargo aquello tampoco ocurrió con esa fecha, y recién se dictó la sentencia de autos con fecha 30 de noviembre de 2021, lo que sin lugar a dudas en una causa de esta complejidad es un vicio irreparable, porque con el paso del tiempo se diluyó la percepción inicial de la prueba que captó la magistrado. La finalidad perseguida por el legislador al consagrar el principio de inmediación, es como una verdadera garantía del debido proceso en materia de jurisdicción laboral, en atención al mandato constitucional del artículo 19 N°3 de la actual Constitución Política de la República, por lo que el vicio tuvo influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia, por cuanto de no haber incurrido, habría llevado a acogerla, en lo particular la acción de cobro de prestaciones, en especial lo que dice relación a la indemnización convencional pactada por las partes y la vulneración del artículo 5 del Código del Trabajo.

**Segundo:** Que, sin perjuicio de la inconsistencia de alegar vulnerada la inmediación sólo respecto a las prestaciones que rechazó la sentencia, que en lo que interesa a esta causal también incluye la acción de tutela, se debe



además considerar que la inmediación comprende, tanto el contacto directo del juez con las partes, los antecedentes de la causa y la prueba rendida en ella, sin agente intermediario alguno, lo que en doctrina se denomina el *elemento espacial*, lo que en la especie el recurrente no cuestiona se cumplió en el juicio oral laboral; como también incluye el *elemento temporal*, dado que las ventajas del elemento espacial se verían anuladas si media un tiempo excesivo entre el momento de recibirse la prueba y el momento de la decisión, siendo este último el que el recurrente considera lesionado, fundándose en el transcurso excesivo del tiempo transcurrido entre ese contacto directo desde la fecha de término de la última audiencia de juicio y la dictación de la sentencia, por haber transcurrido un período de 6 meses y 23 días.

**Tercero:** Que, sin perjuicio del reconocimiento que realiza el recurrente respecto a la excesiva carga de trabajo que tienen los jueces de los tribunales del trabajo de Santiago, lo que en una causa compleja podría justificar un retraso en resolver una causa, lo determinante para establecer vulnerado el principio de inmediación, respecto al elemento temporal que se esgrime vulnerado, es si en el presente caso éste resultó comprometido, para lo cual el recurrente debió haber explicado cómo el transcurso del tiempo influyó substancialmente en lo dispositivo del fallo, que justifique la realización de un nuevo juicio oral, dando para ello ejemplos concretos de cómo la afectación del citado elemento, pudo haber afectado la elaboración y redacción del fallo, lo que no realiza convenientemente, limitándose a citar doctrina, jurisprudencia, y realizando frases genéricas que lo manifestarían, tales como que ello “*se ve reflejado en la una sentencia errónea y desprovista de fundamentación (basta ver considerando décimo tercero de la sentencia)*”, sin explicitar en qué parte de dicho considerando impugnado se podría ver reflejada la vulneración que esgrime.



**Cuarto:** Que, en consecuencia, atendiendo al hecho que por los argumentos expuestos por el recurrente no se visualiza vulnerada la intermediación, en términos que justifique anular la sentencia y el juicio oral, se rechazará este primer motivo de invalidación.

**Quinto:** Que, en subsidio del vicio anteriormente descrito, la parte demandante funda su recurso de nulidad, en la causal del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, en relación al artículo 459 N° 4 del mismo cuerpo normativo, alegando que la sentencia, en cuanto rechaza el pago de la diferencia de indemnización por años de servicio y sustitutiva del aviso previo a su representada, en lo que dice relación con la indemnización convencional pactada por las partes y la vulneración del artículo 5 del Código del Trabajo, no analizó la totalidad de la prueba rendida en autos, para acreditar su procedencia. Señala que, para determinar la validez de las cláusulas contractuales, respecto de las indemnizaciones y su fórmula de pago, la jueza necesariamente debió realizar un análisis exhaustivo de los medios probatorios allegados a los autos por las partes y, en específico, de la prueba documental de ambas y la exhibición de documentos solicitada por el demandante, ya que era la prueba idónea para efectos de demostrar la procedencia y pago de los conceptos demandados respecto de este hecho a probar. Sin embargo, afirma que en el considerando décimo tercero de la sentencia -que transcribe-, lo que hace la magistrada es realizar un análisis solo en base a los contratos suscritos por las partes, de los años 1995 y 2018, las liquidaciones de remuneraciones de ese periodo, estableciendo que se rechaza la aplicación de la indemnización convencional del contrato de 1995. Añade que de dicho considerando se puede desprender que la jueza no analizó la totalidad de la prueba rendida en autos (Documental de la demandante y exhibición solicitada por su parte) y, al no hacerlo, trae como consecuencia que su razonamiento parte de la base de premisas erradas y



equivocas, siendo inconcuso que las partes sustituyeron la indemnización convencional pactada, pues la primitiva aseguraba al actor -cualquiera fuera la causal de término- que se pagaría los años completos de servicios prestados continuamente a la empresa y por las fracciones de años de servicio y esta ascenderá al promedio de los sueldos de contrato de los últimos seis meses de vigencia de este, la que se sustituyó el 2 de enero de 2018, por una suma única de 2.215 UF.

Precisa que de este hecho asentado, lo único efectivo es que existen dichos instrumentos laborales, pero también es un hecho que consta en la prueba rendida en autos y que no fue analizado por la jueza de autos, que el segundo instrumento laboral de fecha 2 de enero de 2018, no fue acordado por las partes, sino fue impuesto por la demandada dentro del el marco de una nueva política de remuneraciones e indemnizaciones que entraba en vigencia del enero de 2018, lo que claramente no podía ser negado por el demandante, ya que todos sabemos que en el ámbito laboral el que no firma lo que le presenta su empleador termina con el despido, más aun cuando este cambio de estructura remuneracional y IAS (indemnización años de servicios) se implementa de manera global en la compañía. Ello sin lugar a dudas violenta en el caso de marras el artículo 5 del Código del Trabajo, ya que en los hechos signifco que el actor al suscribir por obligación este nuevo contrato de enero de 20218, desmejorando sus derechos laborales en cuanto a la indemnización convencional por años de servicios y sustitutiva del aviso previo, al momento de su desvinculación.

En cuanto a los documentos incorporados por su parte y la exhibición de documentos solicitada y cumplida por la demandada, y no analizados por la sentenciadora que avalan lo anteriormente señalado, se encuentran las siguientes probanzas: copia simple de documento denominado sistemas



de Compensaciones CMPC y filiales Chile 2018 emitido por la denunciada, que consiste en un documento aplicable a CMPC y sus filiales Chile 2018, determina que entrará en vigencia en enero de 2018, que la jefatura entregara la información y documentación en cada caso, que la indemnización anual (IAS) devengada a la fecha se mantendrá congelada en UF a cada persona y que la compañía decidió reformar el sistema de renta actual; el contrato de trabajo de Héctor Farías y CMPC Tissue S.A, de fecha de otorgamiento 2 de enero de 2018; la exhibición solicitada por su parte, que hace referencia a los contratos de trabajo y descripción de cargo actualizados de los siguientes empleados de la denunciada: a. Hernán Alberto Brito Núñez; b. José Luis Hernández Perea; c. Héctor Miguel Farías López; d. Christian Alberto Porturas Busso y; e. Gerardo Jose Marti Olbrich.

Del análisis de la prueba reseñada, solo se puede concluir que los contratos de trabajo de enero de 2018, no fueron firmados libre y espontáneamente por las partes, sino que obedecieron a una nueva normativa/política de la compañía a nivel global, de la cual el demandante no podía sustraerse, pero dicha firma no puede en caso alguno pasar sobre el artículo 5 del Código del Trabajo.

**Sexto:** Que respecto a esta causal del artículo 478, letra e) del Código del Trabajo -en el aspecto postulado por el recurrente- cabe consignar que con ella se procura verificar que se hayan cumplido con los requisitos formales que la ley exige para la formulación del juicio de hecho, es decir, que contenga las razones en virtud de las cuales se asigna o se desestima valor probatorio a los medios aportados por las partes, lo que acontece en este caso, pues el tribunal a quo analizó la prueba que resultaba pertinente a la cuestión controvertida, siendo ajeno a esa materia el cuestionamiento de la validez del contrato de trabajo del año 2018, porque



en concepto del recurrente se infringiría el artículo 5 del Código del Trabajo.

**Séptimo:** Que, por lo demás, el recurrente tampoco indica cómo la falta de análisis de los documentos que señala, puede incidir en modificar la conclusión fáctica a la cual arribó el tribunal de la instancia, porque no precisa qué hecho concreto es el que dan cuenta, limitándose a citarlos y a señalar que con su análisis se habría concluido que el contrato del año 2018 es nulo o contrario al artículo 5 del Código del Trabajo, pretensión que no es posible acceder, dado que no puede pretender que por la vía del análisis de esos documentos, se establezca la nulidad de un contrato, por lo que se rechazará esta segunda causal.

**Octavo:** Que, en consecuencia, no siendo efectivo que la sentencia se haya dictado con omisión de los requisitos del artículo 459 N° 4 del Código del Trabajo, porque ella contiene el análisis de la prueba que resultaba pertinente a la cuestión controvertida, estableciendo el tribunal los hechos que estimó probados y el razonamiento que condujo a dicha estimación, no visualizándose además que los documentos que alega omitidos el recurrente incida en lo dispositivo del fallo, se rechazará este motivo de invalidación.

**Noveno:** En subsidio de la causal antes desarrollada, la parte demandante alega el vicio de nulidad del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, alegando infringido el principio de la razón suficiente, pues en su concepto, escapa a toda lógica la decisión de la magistrado actuante, en orden a denegar lo solicitado por su parte, en cuanto a que el contrato de trabajo suscrito por el actor en el año 2018 y que modifica el cálculo de sus remuneraciones e indemnizaciones, específicamente la indemnización por años de servicio, entre otros puntos, vulnera el artículo 5 del Código del Trabajo en cuanto determina la indemnización convencional que debe





aplicarse a la desvinculación del actor. Lo anterior se basa en un razonamiento realizado por la sentenciadora, que no dice relación con lo que ésta debía decidir, ya que, según los puntos de prueba decretados en autos por la misma jueza falladora, la controversia estaba radicada en las “*Cláusulas contractuales pactadas entre las partes respecto de las indemnizaciones, validez de las mismas. Forma de cálculo de dichas indemnizaciones*”, y los medios probatorios aportados en autos, permiten llegar a la conclusión lógica de que el anexo de contrato del año 2018, vulnera la norma contenida en el artículo 5° del Código del Trabajo, arribando sin embargo la sentenciadora, en el considerando Décimo Tercero que transcribe, una conclusión diversa.

Agrega que del último párrafo de esa motivación, se desprende que la jueza con el fin de justificar el rechazo de lo solicitado por su parte, realizó un ejercicio matemático, pero involucra conceptos de naturaleza jurídica distintos y que no son compatibles entre sí, lo que claramente vulnera el sub principio de la lógica de razón suficiente, lo que deja en evidencia que si lo que quiso fue fallar “en justicia”, realizando una operación matemática que escapa de toda lógica, que mezcla conceptos de distinta naturaleza jurídica, que ni siquiera estaban sometidos a su conocimiento a través de las teorías del caso de las partes, el efecto conseguido es precisamente contrario a toda justicia, pues parte de la base de una premisa equivocada y deja desprovisto al fallo de la lógica necesaria para sustentarlo y con ello claramente se infringen las reglas de la sana crítica.

**Décimo:** Que, en relación a esta última causal, ella exige algo más que una mera discrepancia con el raciocinio valorativo de la sentencia. En efecto, se requiere, en primer lugar, que la infracción a las normas sobre valoración de la prueba que se alega, conforme a las reglas de la sana crítica sea manifiesta. Esto significa que el vicio debe ser notorio, ostensible,



capaz de ser percibido sin mayores disquisiciones. Además, debe indicar el recurso cuales son las reglas de la sana crítica que se estiman infringidas y de qué forma ello se produce, todo lo cual no cumple el recurso de la parte demandante.

**Undécimo:** Que, en efecto, si bien la demandante alega infringido el principio de la lógica de razón suficiente, al invocarlo no cuestiona el establecimiento de los hechos que asentó la sentencia para establecer la indemnización convencional que debía considerarse frente al despido del actor, sino que reconociéndola, en su recurso sólo impugna la validez de lo estipulado en el contrato de trabajo del año 2018, pretendiendo que se declare la nulidad de sus cláusula porque en su concepto, habría una razón suficiente para declarar dicha sanción, lo que es ajeno a este motivo de invalidación, porque como se indicó, no puede pretender que por la vía de impugnar ahora la valoración de esta prueba, se declare la nulidad de ese contrato, que el tribunal a quo debía valorar por haberse incorporado al juicio oral.

**Duodécimo:** Que, por otro lado, tampoco explica el carácter manifiesto de la infracción a las normas sobre valoración de la prueba que permitan tal afirmación, limitándose a discrepar del raciocinio valorativo que la sentencia otorgó a ese contrato de trabajo de enero del año 2018, no siendo posible otorgar las diferencias de indemnización que pide, porque el suscrito el año 1995 fue modificado por ese último, por lo que no se advierte vulneración al principio de razón suficiente, porque para establecer los hechos la sentencia se fundó en esta prueba incorporada al juicio oral laboral, siendo una cuestión diferente, que el recurrente no comparta los fundamentos que señaló para otorgarle mérito probatorio.

**Décimo Tercero:** Que, en consecuencia, atendida las deficiencias formales expuestas y al no haberse configurado ninguna de las dos causales



invocadas, el recurso de nulidad laboral impetrado por la parte demandante, será desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la parte demandante, en contra de la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

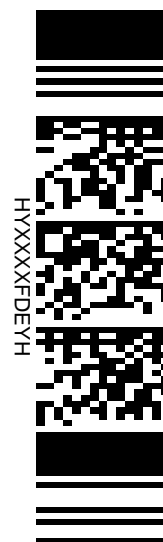
Se previene que el Fiscal Judicial señor Norambuena, fue de opinión de hacer notar la inconsistencia que implica alegar en el recurso, respecto del mismo hecho y petición que se realiza, dos causales que se contradicen, porque por un lado se alega que no se analizó la prueba, y por la que siguiente que se analizó pero que sólo se vulneró la sana crítica.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Fiscal Judicial señor Jorge Luis Norambuena Carrillo.

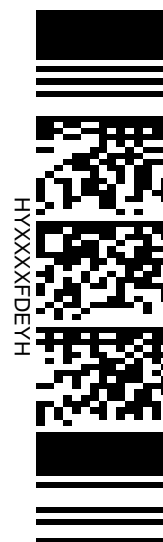
No firma el ministro señor Astudillo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por ausencia.

Nº Laboral-Cobranza 4127-2021.



Pronunciado por la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Lilian A. Leyton V. y Fiscal Judicial Jorge Luis Norambuena C. Santiago, trece de julio de dos mil veintidós.

En Santiago, a trece de julio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>